

1º.- Con fecha 25 de marzo de 2019 tuvo entrada en RENFE-Operadora solicitud de al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001-033581.

A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada Ley para su resolución.

El 23 de abril de 2019 fue ampliado su plazo de gestión en un mes adicional.

2º.- En virtud de dicha solicitud de información, el ciudadano solicitaba el acceso a la información en los siguientes términos:

*“Solicito la siguiente información desglosada por días o, si no es posible lo anterior, por meses, entre 2014 y 2018, ambos inclusive, y desglosada también por todas y cada una de las líneas/trayectos existentes en cada uno de los tipos de tren (cercanías, media distancia, larga distancia, AVE...):*

- *Número total de trayectos realizados en todas y cada una de las líneas de cercanías RENFE y que se indique todos y cada uno de los trayectos que sufrieron retraso y qué tiempo de retraso sufrieron. Solicito, además, que se indique el tipo de tren/viaje en cada una de las líneas.*

- *Número total de trayectos realizados en todas y cada una de las líneas de RENFE media distancia y que se indique todos y cada uno de los trayectos que sufrieron retraso y qué tiempo de retraso sufrieron. Solicito, además, que se indique el tipo de tren/viaje en cada una de las líneas.*

- *Número total de trayectos realizados en todas y cada una de las líneas de Larga Distancia, como Ave o Avant, y que se indique todos y cada uno de los trayectos que sufrieron retraso y qué tiempo de retraso sufrieron. Solicito, además, que se indique el tipo de tren/viaje en cada una de las líneas (ave, avant o el que sea).*

*Indicar, además, que para cada línea/trayecto solicito que se indique todos los puntos geográficos y estaciones por los que pasa y en qué comunidad autónoma tiene lugar..”*

3º.- Una vez analizada la solicitud, esta entidad considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.h de la citada Ley 19/2013, procede denegar el acceso a la información a que se refiere la petición realizada, por los motivos que a continuación se reseñarán. En efecto, no procede acceder a elaborar el informe solicitado, con independencia de que pueda o no considerarse uno de los supuestos del artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, por lo que a continuación se pondrá de manifiesto.

El transporte ferroviario es un servicio de interés general prestado por la sociedad mercantil estatal Renfe Viajeros, S.A., (Renfe Viajeros). Se publican, con la anuencia de la Administración General del Estado, los índices de calidad y desempeño y los parámetros fundamentales de prestación del servicio.

También reciben la oportuna publicidad las incidencias que los usuarios deben conocer para una mejor planificación de su viaje o para paliar los inconvenientes y molestias inherentes. Sin perjuicio de lo anterior, no es exigible que Renfe Viajeros elabore, conforme a las especificaciones de la solicitud, a la carta, esta información, solicitada con alto grado de detalle, en cuanto este trabajo y su publicación redundarían previsiblemente en injustificado perjuicio de los intereses comerciales de dicha sociedad. Tiene apoyo esta conclusión en la doctrina sentada en varias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señaladamente en la de referencia R/0039/2016, de fecha 14 de abril de 2016, en la de referencia R/0219/2018, de fecha 10 de julio de 2018.

Los servicios prestados por esta sociedad mercantil compiten con otros modos de transporte. Adicionalmente, está próxima la competencia intramodal. Ello supone que datos sensibles, con alto grado de detalle, que pueden ser objeto de utilización ilegítima no deban ser hechos públicos sin antes ponderar el posible perjuicio comercial que pudieran ocasionar a la sociedad mercantil operadora.

En este entorno, facilitar esta información detallada sobre las dificultades de la explotación de este negocio, muchas veces imputables al estado de las infraestructuras públicas, podría perjudicar a Renfe Viajeros, dejándola en posición injustificadamente desventajosa respecto a competidores reales o potenciales, con el añadido de que si se trata de información que puede ser interpretada como significativa de deterioro de alguna faceta de la explotación también puede tener un efecto de injustificado descrédito. La reutilización o reelaboración de la información puede además dañar sin justificación suficiente la imagen del transporte público, en perjuicio de los objetivos de garantía de la movilidad.

No aparece en cualquier caso claro que la información solicitada, resultado en su caso de elaboración, deba calificarse como información pública, en cuanto se trata acceder a detalles de la explotación de un servicio de transporte por una sociedad mercantil, que no publicaría un operador privado. Y el sólo hecho de la titularidad de las acciones de una sociedad no permite considerar a la empresa pública que opera en el mercado de peor condición. Por otra parte, el interés público queda satisfecho mediante la publicación voluntaria de los datos que antes se han referido. Tampoco se aprecia en

este caso un interés público, o privado legítimo, en poner a disposición datos adicionales con tal grado de detalle

En relación a la información adicional de contexto, en virtud de la cual el solicitante pone de manifiesto que esta información serviría para la rendición de cuentas de ADIF E.P.E., hay que advertir que no procede confusión alguna, puesto que tienen forma jurídica y competencias muy distintas, entre Renfe Viajeros S.M.E., S.A. y la Administración institucional responsable de la infraestructura ferroviaria, monopolio natural y legal, que es, por definición, ajeno totalmente a la competencia.

Respecto a que información supuestamente similar se le habría facilitado a un grupo parlamentario, procede advertir que el régimen jurídico al que se someten las Cortes Generales y la información a facilitar al Parlamento, así como las prerrogativas de los parlamentarios, no guardan relación o permiten símil con lo que la Ley 19/2013 regula, pues están también en juego bienes jurídicos distintos, con diferentes grados de protección. En resumen, las prerrogativas del Parlamento no se agotan en el acceso a la información pública regulada mediante la Ley 19/2013. Adicionalmente, mientras que el derecho a la información exigible bajo la Ley 19/2013 tiene una protección ordinaria, el derecho a la información en sede parlamentaria tiene otro carácter e intensidad de protección, como es de ver en los artículos 23 y 109 de nuestra Constitución y en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

4º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, 6 de mayo de 2019.

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

D. Ismael Táboas Suárez.